



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
30 de mayo de 2014
Español
Original: inglés

Comité contra la Tortura 49º período de sesiones

Acta resumida de la 1113ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 9 de noviembre de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19
de la Convención (*continuación*)

Informe inicial del Gabón (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-47519 (S) 270514 300514



* 1 2 4 7 5 1 9 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Informe inicial del Gabón (continuación) (CAT/C/GAB/1)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación del Gabón toma asiento a la mesa del Comité.*
2. **El Sr. Bounguendza** (Gabón) dice que la legislación nacional se ajusta a la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención, a pesar de no incluir una definición redactada en términos idénticos. La tortura está prohibida por la Constitución y por los artículos 228 y 253 del Código Penal. La delegación del Gabón transmitirá al Gobierno la recomendación del Comité de modificar el texto de la Constitución para ajustarlo a la Convención. La tentativa de cometer actos de tortura, así como el invocar órdenes de un superior para justificar la tortura son objeto de procesamiento.
3. De conformidad con los artículos 46 y 47 del Código de Procedimiento Penal, toda denuncia presentada ante el tribunal competente por una persona que haya sufrido lesiones como consecuencia de un delito se transmite al fiscal para que este emprenda las acciones oportunas. Con arreglo a las disposiciones de los artículos 39 y 514 y ss. del Código, se puede aplicar el artículo 5 de la Convención. En virtud del artículo 39, los fiscales son competentes para encausar a los autores de actos de tortura, incluso si inicialmente no han sido detenidos como sospechosos de ese delito. De conformidad con los artículos 514 y ss., el fiscal puede procesar a un ciudadano gabonés en el Gabón aun cuando el acto en cuestión haya sido cometido en el extranjero. Además, el artículo 242 del Código Penal tipifica como delito las amenazas de violencia.
4. La tortura mental es una categoría amplia y diversa que puede incluir actos como los delitos contra los niños, la mendicidad y el vagabundeo forzados, la calumnia y el chantaje. Existe un conjunto de disposiciones legislativas para proteger la dignidad humana contra actos de esa índole, que dan lugar a la imposición de sanciones, por ejemplo cuando los padres no matriculan a sus hijos en la escuela, como dispone la ley.
5. Si bien no es frecuente que la Convención se invoque formalmente en los tribunales, sí cabe hacerlo. Lo mismo se aplica al artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida en que guardan relación con la tortura, y a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se están revisando y actualizando varios aspectos del Código Civil y del Código Penal para que incorporen una amplia gama de principios esenciales. El Código Penal contempla la imposición de sanciones a los autores, cómplices e instigadores de actos de tortura, y a las personas que abusan de su autoridad ordenando actos de tortura. Por su parte, los subordinados están autorizados a desobedecer las órdenes ilegales. Se prevé incorporar el Protocolo de Palermo al Código Penal. También se realizará muy próximamente un estudio en colaboración con el UNICEF para armonizar la legislación nacional con el derecho internacional en materia de derechos del niño. Desde 2010, el Código de Procedimiento Penal incorpora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La pena de muerte fue abolida por la Ley N° 3/2010 y ha sido reemplazada por la cadena perpetua.
6. Se están tomando varias medidas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, entre ellas, la modificación y actualización de la legislación vigente, la formación de personal cualificado en la Escuela Nacional de la Magistratura y la adopción de un enfoque que ponga más de relieve los derechos humanos en las investigaciones y procesos

penales. Además, se han introducido diversas reformas estructurales con el fin de aumentar la eficacia y la independencia del sistema judicial. Estas reformas reducirán la corrupción, las concesiones injustificadas de libertad condicional, la supresión de documentos de los expedientes y otras deficiencias que menciona el informe.

7. Las mujeres desempeñan un papel considerable en el poder judicial: los cargos de Presidente del Tribunal Constitucional y Fiscal General están ocupados por mujeres. Además de la Asociación de Jueces, existen sindicatos de secretarios judiciales y de jueces.

8. La Ley N° 7/94 ha reorganizado el poder judicial. La separación de poderes aparece consagrada en la Constitución y la independencia de los jueces, en la Ley N° 12/94 relativa al Estatuto de los Jueces.

9. El Gobierno ha realizado enormes esfuerzos en el ámbito de la igualdad de género. Alrededor del 40% de los 500 jueces del país son mujeres, y algunas de ellas ocupan puestos de responsabilidad en la carrera judicial.

10. Para hacer frente a los efectos negativos de la falta de personal en la rapidez con que se tratan las causas, sobre todo en Libreville, se está impartiendo formación a nuevos jueces en la Escuela Nacional de la Magistratura, en colaboración con su homóloga francesa en Burdeos.

11. El Gabón ha heredado su ordenamiento jurídico del sistema colonial francés, por lo que la Fiscalía depende del Ministerio de Justicia. Los jueces, incluidos los de instrucción, gozan de total independencia, garantizada por la seguridad en la titularidad del cargo. Los jueces corruptos, que son una minoría, son procesados por el Consejo Superior de la Magistratura. A quienes empañan la reputación del poder judicial, este les impone sanciones, que pueden incluir la destitución.

12. La Fiscalía goza de total discreción en materia de investigación y encausamiento de los sospechosos, y es responsable de emitir las órdenes de detención, cuando procede. En algunas ocasiones no se respeta el límite de 48 horas establecido como duración máxima de la detención policial o de la retención preventiva, pero no es algo frecuente y, por lo general, se debe a carencias de personal o a dificultades de coordinación.

13. La tortura está estrictamente prohibida en el Gabón. Los tribunales no admiten las confesiones y pruebas obtenidas mediante tortura. Sabiendo que ello es así, los acusados, incluso los que han confesado libremente haber cometido un delito, frecuentemente alegan haber sido torturados.

14. La asistencia jurídica se pone a disposición de manera gratuita: a los acusados que no tienen medios para contratar a un abogado el presidente del tribunal les asigna uno de oficio de la lista del Colegio de Abogados, publicada en cada tribunal. La Maison du Droit (centro de asistencia jurídica), creada gracias a la cooperación multilateral con las Naciones Unidas y la Unión Europea, ofrece a los ciudadanos acceso al sistema judicial y proporciona a los grupos vulnerables asesoramiento sobre sus derechos.

15. La Ley N° 39 de Protección de Menores, promulgada en 2010, establece condiciones especiales para la retención de los menores, cuya detención es más corta que la de los adultos. El artículo 145 dispone no solo que los jueces de menores son competentes para adoptar todas las medidas necesarias en relación con la detención policial, sino también que un menor de 13 años no puede ser objeto de un auto de prisión. Los artículos 56 a 60 del Código de Procedimiento Penal establecen los procedimientos a seguir en los casos en que haya menores de edad involucrados. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señalará a la atención del Gobierno las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), pues su aplicación constituye una oportunidad para introducir las diferentes medidas que figuran en el párrafo 8.2, relativas a

la sustitución del encarcelamiento de los menores infractores. La mayoría de edad en el Gabón está actualmente fijada en los 18 años, pero va a elevarse a 21.

16. El Gabón es parte en la Convención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia a los Desplazados Internos en África; la legislación nacional es compatible con las obligaciones internacionales del país y su tradición de hospitalidad. En 2010, había en el Gabón 13.000 refugiados y solicitantes de asilo de 25 nacionalidades diferentes. En 1997, llegaron al país refugiados congoleños. En 2003, el Gabón, la República del Congo y el ACNUR iniciaron un programa de repatriación voluntaria. Unos 450 refugiados pidieron que se les repatriase, mientras que 1.000 solicitaron permisos de residencia para permanecer en el Gabón. La operación de repatriación voluntaria fue coordinada por la oficina regional del ACNUR en Kinshasa, que la consideró muy satisfactoria. Nunca ha habido un plan para expulsar a los refugiados y solicitantes de asilo congoleños. Los que fueron repatriados recibieron asistencia para reintegrarse y reconstruir sus vidas. Los que están pendientes de admisión en Europa, los Estados Unidos o Asia están alojados en un centro de retención para migrantes irregulares, que cumple con las normas internacionales en materia de derechos humanos.

17. En el Gabón se trata bien a los refugiados, que gozan de acceso a los mismos servicios y condiciones que los nacionales del Gabón en todas las esferas de la vida. El Gobierno coopera ampliamente con el ACNUR en ese sentido. Una secretaría permanente coordina las actividades de la Comisión Nacional para los Refugiados, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta misma secretaría se encarga de proporcionar apoyo administrativo y logístico y de coordinar la labor de todas las entidades del Gabón que trabajan en la cuestión de los refugiados.

18. En junio de 2011, los 4.700 extranjeros clandestinos que se encontraban en Minkébé fueron desalojados por la fuerza y en el respeto de la legalidad debido a que, a pesar de las numerosas advertencias de las autoridades gubernamentales, habían seguido saqueando los recursos naturales minerales y animales de la región, como el marfil y el oro.

19. La prisión central de Libreville, la más grande del país, se construyó antes de la independencia de 1960. Como resultado del éxodo rural y del aumento de la población, el número de internos se ha duplicado y, con sus 1.600 reclusos actuales, la prisión está superpoblada. En vista de la situación, el Gobierno ha comenzado a construir nuevos centros penitenciarios que se ajustan a los estándares modernos, inicialmente en Nkoltang (Libreville), Port-Gentil y Oyem. Además, se han previsto renovaciones que mejorarán las condiciones de los presos. Otras medidas, como el indulto presidencial anual, contribuyen a reducir el hacinamiento en las cárceles. El personal médico se encarga de proporcionar a los reclusos los primeros auxilios y el transporte en ambulancia hasta el hospital, según proceda. Los presos pueden practicar su religión, recibir visitas de familiares y presentar denuncias sin temor a represalias; pueden también solicitar que se investiguen las quejas relativas a las condiciones carcelarias. Los hombres, las mujeres, los menores y las personas afectadas por el VIH/SIDA ocupan zonas separadas en los centros penitenciarios, y todos los prisioneros reciben alimentación adecuada. Las cárceles para mujeres están atendidas por personal femenino. La administración de las prisiones depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y no del Ministerio del Interior, como en el pasado.

20. Para aplicar la Convención, su Gobierno, a través de los ministerios competentes, lleva a cabo actividades de sensibilización y de capacitación dirigidas a una gran diversidad de funcionarios públicos y a los reclusos. La sociedad civil apoya los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones en las cárceles.

21. El Gobierno está estudiando la manera de armonizar la legislación nacional con la Convención por lo que se refiere a la trata de personas. El Gabón es un país de tránsito, como ha señalado el Comité, y la visita de la Relatora Especial sobre la trata de personas,

especialmente mujeres y niños, ha sido de gran ayuda en la lucha contra el problema de la trata de personas. Las recomendaciones de la Relatora se están estudiando al más alto nivel, con miras a su aplicación. La trata de personas es una práctica muy extendida en el oeste de África. Además de los esfuerzos que realiza para luchar contra la trata de personas a nivel nacional, el Gabón ha firmado una serie de acuerdos de asistencia judicial mutua con otros Estados, entre ellos Francia, algunos Estados africanos partes en la Convención de Antananarivo y Malí.

22. Los denominados "crímenes rituales", que no forman parte del patrimonio cultural del Gabón, han sido importados del extranjero y dañan la imagen del país. El Presidente ha criticado claramente esos delitos y ha instado al poder judicial a que tome medidas severas contra los autores. Se han puesto a disposición del Ministerio de Justicia 450.000 euros destinados a la investigación de esos delitos y a la celebración de audiencias penales especiales a nivel nacional. A fin de sensibilizar a la población, la prensa ha informado sobre dichas vistas. La mayoría de las personas declaradas culpables en calidad de autores o cómplices han sido condenadas a cadena perpetua. Se ha previsto celebrar otra audiencia ante un tribunal especial antes de finales de 2012. Contrariamente a ciertos rumores infundados, se llevan a cabo investigaciones y se imponen sanciones.

23. El Código de Procedimiento Penal promulgado en 2010 logra un equilibrio entre las exigencias constitucionales de garantizar la seguridad y de respetar las libertades. De conformidad con el nuevo Código, el período máximo de detención policial es de 48 horas, con la posibilidad de prorrogarla otras 48 horas si se cuenta con la autorización escrita del fiscal. Para evitar los abusos de autoridad, cuando un delito no requiera la recopilación de más pruebas, la detención policial solo puede prorrogarse a un máximo de ocho días.

24. En todas las actuaciones previas a la celebración del juicio se respetan las garantías procesales. Bajo el control de la fiscalía y la supervisión del Tribunal de Apelaciones, la policía judicial lleva a cabo las investigaciones policiales con arreglo a la ley y puede retener a los sospechosos durante un máximo de 48 horas. Cuando no es posible hacer comparecer al detenido ante un juez de inmediato, como puede ser el caso en zonas remotas, la policía judicial puede dictar una orden de retención no renovable, por un período de ocho días.

25. En cuanto a las denuncias, la indemnización y las pruebas, cualquier persona en el Gabón que considere que ha sido víctima de torturas directa o indirectamente tiene derecho a presentar una denuncia y a recurrir una sentencia dentro de un plazo de diez días. Toda parte perjudicada tiene derecho a solicitar una indemnización. El derecho civil establece los requisitos legales para la presentación de pruebas; en el derecho penal, todos los medios de prueba son admisibles siempre que estas se hayan obtenido de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

26. A pesar de haber sido creada en 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dispone todavía de una sede ni de un presupuesto de funcionamiento adecuado. La Comisión se reunió a principios de año con el Primer Ministro para buscar soluciones a esos problemas. Está integrada por 1 presidente, 2 vicepresidentes, 2 relatores y 7 miembros, además de la secretaria general. La Comisión ha informado de su existencia al Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, pero no ha solicitado acreditación.

27. La comunidad indígena representa el 1% de la población del Gabón, y el Gobierno está tomando medidas para proteger sus derechos y fomentar su integración. Los estereotipos negativos van desapareciendo poco a poco, y se observa una progresiva valorización de las comunidades indígenas y sus conocimientos. Algunas personas que ocupan puestos importantes en la administración, el sistema educativo y el sistema de salud provienen de comunidades pigmeas. Las políticas del Gobierno no son discriminatorias, y

la mayoría de las comunidades indígenas conocen las normas de higiene y salud, y tienen acceso a la enseñanza.

28. El problema de las partidas de nacimiento no afecta únicamente a la comunidad pigmea, y el Gobierno está haciendo lo necesario para resolverlo. Es el resultado de la ineficiencia del sistema administrativo descentralizado.

29. También se están haciendo esfuerzos para resolver el problema de los castigos corporales; se han adoptado medidas para proteger a los niños y sancionar a los adultos.

30. En cuanto a los incidentes que supuestamente tuvieron lugar en 2009 en Port-Gentil, el orador señala que abundan los rumores, a veces iniciados por organizaciones no gubernamentales (ONG) por motivos políticos.

31. La edad legal para contraer matrimonio está en el proceso de ser elevada de 15 a 18 años. También se están tomando medidas para reconocer oficialmente los matrimonios consuetudinarios y religiosos, y poner así fin a la hipocresía judicial al respecto. Se prevé que los matrimonios consuetudinarios serán registrados por un funcionario judicial. En 2011 se creó una comisión especial para examinar qué métodos se podrían emplear para reconocer oficialmente esos matrimonios y, actualmente la Asamblea Nacional está estudiando un proyecto de ley sobre la cuestión. En lo referente al matrimonio consuetudinario, es necesario adoptar medidas legislativas que tengan en cuenta la situación real del Gabón y no solo la de las culturas romano-germánicas en las que se basa el sistema jurídico del país.

32. Se están aplicando medidas de prevención y sensibilización, especialmente en las prisiones, las familias, las escuelas y el sistema judicial. Por ejemplo, en el presente año se va a iniciar una campaña de sensibilización en los centros de detención. Esos esfuerzos demuestran que el Estado parte está firmemente decidido a enfrentar el problema de la tortura y a aplicar las disposiciones de la Convención.

33. **La Sra. Belmir** (Relatora para el país) elogia las respuestas francas de la delegación y las medidas legislativas adoptadas por el país. Desea plantear la cuestión de la definición de tortura, dado que el Estado parte tiene previsto revisar el Código Penal e incluir una definición que se ajuste al artículo 1 de la Convención. Solicita aclaraciones adicionales sobre el delito de tentativa de tortura, que debe estar tipificado con mayor claridad en la ley y ser debidamente sancionado.

34. Dado que en la legislación nacional hace referencia a otros instrumentos jurídicos internacionales, se pregunta por qué no se menciona la Convención ni el hecho de que el Estado parte la ha ratificado. Los jueces deben invocar directamente la Convención. La oradora pregunta si la ley que incorpora la Convención al ordenamiento jurídico nacional es de aplicación directa o si requiere la aplicación de disposiciones legislativas específicas.

35. Solicita información más detallada sobre el poder judicial, entre otras cuestiones, sobre el proceso de nombramiento de los jueces, el control de su carrera y la función del poder ejecutivo en la materia.

36. Desea obtener más información sobre la cuestión que planteó anteriormente, a saber, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad *a posteriori*. También agradecería que se proporcionasen precisiones adicionales sobre la formación que reciben los jueces, sobre todo teniendo en cuenta que los sistemas sociales y judiciales del Gabón y de Francia son diferentes.

37. En relación con el sistema de protección de los menores, debe estudiarse la posibilidad de aplicar soluciones sustitutivas de la detención policial y de la privación de la libertad. El objetivo debe ser cumplir con las normas internacionales en la materia.

38. La oradora pide a la delegación que proporcione más información y estadísticas sobre los refugiados congoleños, el proceso de presentación de denuncias y las medidas adoptadas al respecto, así como sobre los resultados de las denuncias presentadas.
39. Aludiendo a la situación de los extranjeros clandestinos en Minkébé, pregunta si algún caso se ha llevado a los tribunales. Si es así, solicita información sobre los recursos que se hayan presentado y el seguimiento que se les haya dado.
40. Solicita más información sobre las condiciones de los centros de detención rurales, las medidas que se hayan adoptado y los efectos de estas en el comportamiento de los detenidos.
41. Celebra la información presentada sobre las mujeres detenidas y el sistema de vigilancia y pide más información sobre el acceso de las mujeres a la justicia y sobre las mujeres que ocupan puestos de responsabilidad.
42. El Comité solicita que la delegación proporcione información más específica sobre los incidentes registrados durante las elecciones, entre ellos los asesinatos que presuntamente se cometieron. Es esencial que se aclaren los hechos.
43. El Estado parte ha reconocido que la trata de niños constituye un problema y ha estudiado con atención las preocupaciones de la Relatora Especial. La oradora solicita más información sobre el nuevo sistema de vigilancia de los interrogatorios y pregunta si los métodos utilizados para tomar declaración a los niños tienen en cuenta sus necesidades especiales. El uso de grabaciones de vídeo es una buena estrategia.
44. Pide aclaraciones sobre el plazo de ocho días que puede solicitar la policía judicial para hacer comparecer a una persona ante el juez. Desea saber cuál es el fundamento jurídico de esa medida.
45. Con respecto a la indemnización y el proceso de presentación de denuncias, pregunta si se puede obtener reparación sin haber presentado una denuncia.
46. **El Sr. Domah** (Relator para el país), refiriéndose a las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 10 de la Convención, solicita más información sobre las medidas adoptadas en materia de formación y la labor de sensibilización sobre los derechos y responsabilidades previstos en la Convención. El artículo 10 obliga al Estado parte a velar por que se incluya información sobre la prohibición de la tortura en la formación que se imparte al personal médico, los funcionarios públicos y las personas que participen en la vigilancia de la retención, el interrogatorio o el tratamiento de las personas privadas de libertad.
47. Si bien el Relator celebra la legislación aprobada por el Estado parte para combatir la tortura, la aprobación de nuevas leyes no es un fin en sí mismo; es preciso además sensibilizar y crear una cultura basada en la noción de legalidad. Se necesitan medidas eficaces de prevención, como la provisión de formación adecuada y la creación de una base de datos informatizada.
48. En cuanto a las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 10, han sido escasas las precisiones concretas en relación con la tortura. En consecuencia, pide más información sobre el contenido y los resultados de los cursos de formación.
49. En referencia a las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 11, pregunta si se han tomado medidas para actualizar los métodos y las prácticas en materia de formación. Es importante contar con un mecanismo de prevención de la tortura y con medidas que garanticen una vigilancia sistemática y el uso de métodos de interrogatorio apropiados. ¿Qué disposiciones existen al respecto?

50. Aunque acoge con agrado la promulgación del Código de Procedimiento Penal, considera que la consolidación del régimen de derechos humanos no es más que un primer paso. Remitiéndose al artículo 12 de la Convención, desea saber si las investigaciones se llevan a cabo de manera seria y profesional, y pregunta sobre el resultado de las denuncias.
51. Es importante asegurarse de que las denuncias se investigan debidamente. En consecuencia, desea saber qué autoridad tiene competencia en esa cuestión. ¿Qué medidas prácticas se adoptan para proteger a los denunciantes y a los testigos?
52. El Relator agradecería que la delegación facilitase más información en relación con el artículo 14, en particular sobre las medidas administrativas e institucionales destinadas a proteger los derechos de las víctimas de tortura.
53. Solicita que la delegación proporcione más información acerca de las confesiones realizadas bajo coacción y acerca de la manera en que los jueces y magistrados verifican si las pruebas se han obtenido por esos medios.
54. **El Sr. Bruni** celebra la determinación del Estado parte para combatir la tortura, y solicita más información respecto de la creación de un mecanismo nacional de prevención.
55. En lo que se refiere a la legislación vigente para luchar contra la mutilación genital femenina, pregunta cuántas causas se han incoado, qué sanciones se han impuesto y qué efecto han tenido las medidas adoptadas para combatir esa práctica.
56. ¿Cuántos procesos se han iniciado en aplicación de la legislación de 2002 sobre la trata de niños?
57. En cuanto a las medidas de vigilancia, desea saber cuáles fueron los resultados de la visita realizada por los miembros del poder judicial a la prisión central de Libreville para evitar los malos tratos de las personas privadas de libertad, y pregunta si los reclusos presentaron alguna denuncia y si se formuló alguna recomendación.
58. Pregunta si el Manual para la investigación eficaz de presuntos actos de tortura forma parte de los programas de capacitación que se imparten al personal responsable de los detenidos y al personal que les proporciona asistencia médica.
59. **El Sr. Gaye**, refiriéndose a la cuestión de la definición de la tortura como delito penal, dice que a juzgar por las respuestas del Estado parte los actos de tortura pueden sancionarse recurriendo a calificaciones sustitutivas. Sin embargo, es esencial introducir una ley específica que tipifique como delito la tortura y la sancione en consecuencia. Dado que el Estado parte tiene planes para reformar el procedimiento penal, debe plantearse definir claramente la tortura y la tentativa de tortura e introducir las disposiciones legislativas necesarias.
60. El orador pregunta si existe un sistema que proteja a los subordinados que se niegan a obedecer las órdenes de un superior de cometer actos de tortura.
61. Los poderes de la policía judicial en relación con la privación de libertad constituyen un motivo serio de preocupación. Parece que los detenidos solo tienen acceso a un abogado una vez que su caso llega a los tribunales. Solicita información adicional al respecto.
62. Agradecería que la delegación proporcionase más información sobre las garantías jurídicas que protegen a los detenidos, y pregunta si la policía tiene la obligación de notificar su detención a las personas que estos indiquen.
63. Pide que se aclare cuál es la duración máxima de la prisión preventiva.
64. Pregunta acerca de las medidas sustitutivas de las penas, especialmente en el caso de menores.

65. Cuando el autor de un acto de tortura es un funcionario del Estado, ¿puede el Estado, además del funcionario en cuestión, ser considerado responsable?

66. **La Sra. Sveaass** solicita aclaraciones acerca de la definición de tortura prevista en el Código Penal del Gabón. La definición que figura en el informe del Estado parte incluye una referencia a la tortura física, mientras que la definición que ha mencionado la delegación no se refiere específicamente a la tortura física y parece centrarse únicamente en la tortura de las personas arrestadas o detenidas.

67. La oradora pregunta si el Estado parte ha aceptado la recomendación de tipificar como delito los castigos físicos y corporales de los niños en el hogar y otros entornos de acogimiento, que se formuló a raíz del examen periódico universal del Gabón de 2008. También sería útil saber si se ha aprobado la ley para proteger a los menores, y si se ha puesto en marcha la formación destinada a ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a ocuparse de las víctimas de violencia contra las mujeres.

68. Desea saber si se ha encausado o condenado a alguien por violar la Ley N° 0038/2008 de Prevención y Lucha contra la Mutilación Genital Femenina.

69. **El Sr. Mariño Menéndez** dice que, dada la baja participación de las ONG en el examen que realizó el Comité del informe inicial del Gabón, desea saber hasta qué punto la sociedad civil está representada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Se proporcionará apoyo especial a las ONG a través de la Comisión y se les permitirá visitar los lugares de detención?

70. **El Presidente**, hablando en calidad de miembro del Comité, pregunta cuáles son los plazos previstos para la construcción de las cárceles. Desea saber si se ha procesado a alguien por haber dañado la reputación del poder judicial y, si es así, pide que se facilite información detallada al respecto.

71. Puesto que la tortura ha dejado de estar penada con la muerte, pregunta qué castigo se impone. Pide a la delegación que comunique los nombres de los implicados en los casos a los que ha hecho referencia. Asimismo, le solicita que confirme que el proceso de inscripción de los nacimientos estará pronto en funcionamiento.

72. En relación con el ataque sufrido por una cadena de televisión del Gabón en 2012, solicita que la delegación ponga al corriente al Comité sobre la investigación del incidente.

73. **El Sr. Dodo Bounguendza** (Gabón), reconociendo que la definición de tortura que figura en la legislación del Gabón es incompleta, ya que no incorpora la definición que recoge la Convención, dice que se está procediendo a la revisión de los instrumentos jurídicos básicos, como el Código Penal y el Código Civil. Si bien los jueces pueden fundamentar directamente sus decisiones en la Convención, no están obligados a hacerlo; va a revisarse la legislación pertinente con miras a incluir formalmente ese requisito.

74. Para ser admitido en la Escuela Nacional de la Magistratura se requiere haber cursado una maestría. La mayoría de los estudiantes han estudiado previamente en las facultades de derecho de universidades del Gabón o de Francia. La formación de los funcionarios judiciales en la Escuela dura dos años y, una vez que comienzan a ejercer de jueces, asisten a cursos de perfeccionamiento profesional. También existen programas de capacitación dirigidos a otros empleados del sistema judicial, en particular el personal penitenciario. En 2011, el mandato del Ministerio de Justicia se amplió para incluir la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos. La delegación verificará si los programas de formación tratan la cuestión de la tortura.

75. A fin de preparar el retorno de los refugiados congoleños a la República del Congo, las delegaciones de ambos países se reunieron para definir el procedimiento a seguir. La participación del ACNUR garantizó que se respetase el derecho internacional durante todo

el proceso. Tras haberse completado la primera fase del procedimiento, el ACNUR publicó un informe al respecto. Algunos refugiados optaron por permanecer en el Gabón; a estos se les concedió un permiso de residencia. Otros solicitaron asilo en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa y América del Norte, pero hasta el momento ninguna de las peticiones ha sido aceptada. Estos solicitantes de asilo permanecen en un centro de internamiento en Libreville.

76. En las zonas rurales, las cárceles se encuentran por lo general en la capital provincial. Además del compromiso de construir cárceles modernas, existe un programa para renovar algunos centros penitenciarios existentes —también en las zonas rurales— y de ese modo ajustarlos a las normas internacionales en la materia.

77. El Código Penal y el Código Civil se revisaron por última vez en los años setenta, cuando la infraestructura en muchas regiones del Gabón consistía en pistas de tierra y líneas de ferry de escasa frecuencia, y muchos viajes solo podían hacerse a pie. El plazo de ocho días entre la primera y la segunda comparecencia de un acusado ante un juez se fijó teniendo en cuenta las condiciones imperantes en las regiones en aquel momento. En la actualidad, con la modernización de las infraestructuras, es poco habitual que se utilicen todos los ocho días.

78. La mutilación genital femenina no es una práctica tradicional del Gabón y no se obliga a las niñas a que se sometan a ella. Algunas chicas han solicitado la escisión porque consideraban que les ayudaría a encontrar un buen marido. Así pues, el propósito de la Ley N° 0038/2008 de Prevención y Lucha contra la Mutilación Genital Femenina es proteger a las niñas. Desde la aprobación de la Ley, el procedimiento se realiza con menos frecuencia.

79. El mecanismo nacional de prevención encargado de vigilar la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención, que debía haberse puesto en funcionamiento en noviembre de 2011, está actualmente en proceso de creación. La legislación prevé que toda persona que haya sido detenida tiene derecho a que se notifique su detención a quien elija. Existen para los menores penas sustitutivas de la prisión, por lo que sería lógico que se pudieran aplicar también a los adultos. Se adoptarán medidas para formalizar las disposiciones pertinentes.

80. En el Gabón se respeta la libertad de prensa. El Estado subvenciona a menudo la prensa privada, pero eso no afecta a la capacidad de esta para llevar a cabo su trabajo de manera independiente. Es posible que el Comité haya observado que la cuestión se enfoca de manera diferente en el Gabón, donde no existe una cultura de la difamación.

81. El canal de televisión que sufrió un ataque funciona normalmente en la actualidad. No es raro que un país restrinja la libertad de los medios de comunicación si el orden público se ve amenazado, y en el caso en cuestión la cadena de televisión se cerró por incitación al enfrentamiento étnico. El Gabón, que es un Estado con más de 80 lenguas étnicas diferentes, está obligado a proteger a todos sus ciudadanos.

82. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido el mandato de supervisar y dar seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de los órganos de tratados de derechos humanos, y de elaborar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país. La Comisión, que refleja el conjunto de la sociedad civil, está integrada por representantes de las religiones, los sindicatos y las ONG, así como del Ministerio de Justicia y de otros órganos del Estado. Aunque la sociedad civil no constituye el grupo dominante en la Comisión, está bien representada en ella.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.